



VOL: AÑO 9, NUMERO 26

FECHA: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1994

TEMA: EL SIGLO XIX MEXICANO: Una visión de la historia desde la sociología

TITULO: **La formación de las casas bancarias de la ciudad de México durante el período independiente**

AUTOR: *Leonor Ludlow* [*]

SECCION: Artículos

RESUMEN:

Este artículo examina el período de formación de las casas bancarias en el México de los años 1830 a 1840 -el período llamado "de los agiotistas"-, que se caracterizó por ser uno de endeudamiento público. El análisis se detiene en el momento de la crisis crediticia por la que atraviesa el Estado mexicano a mediados del siglo pasado.

ABSTRACT:

The Conformation of Mexico City's Banking Firms During the Independence Era

This article examines the conformation process of banking firms in Mexico, between 1830 and 1840-the so called "agiotage period"-, which was one of great public indebtedness. The analysis stops in the credit crisis in which Mexican State went through at the middle of the nineteenth century.

TEXTO

La literatura histórica reconoce a las ciudades como espacio privilegiado para la formación y crecimiento del régimen capitalista, en tanto que en éstas se formaliza una economía que conjunta múltiples mercados con el fin de asegurar el intercambio y aprovisionamiento de bienes, capitales y mano de obra.

Al terminar la década independiente, la ciudad de México resintió una fuerte fractura en el dominio que había ejercido sobre el espacio mercantil colonial que cubría los estados del centro y el Golfo de México. A lo largo de la tercera década del siglo XIX viejos y nuevos grupos de comerciantes radicados o vinculados con la capital mexicana se dieron a la tarea de restablecer esos viejos controles por medio de su participación en el manejo del crédito público, con lo cual estrecharon sus relaciones con el poder político.

Estos grupos vieron facilitada su tarea por la existencia de diversos mecanismos que les permitieron reconstruir y multiplicar las relaciones desde la ciudad de México con el mercado externo, tarea que realizaron gracias al control que mantenían sobre las antiguas rutas y caminos o por el manejo de la más importante casa de moneda del país.

Esto ocurrió en el marco de la desintegración mercantil, monetaria y fiscal que afectó por igual a todo el territorio durante el siglo XIX, y que en el caso de la ciudad de México fue restablecida a través de su conexión con el exterior a través de los puertos de Tampico y Veracruz en el Golfo; en tanto que en el plano interno, si bien la capital no logró ser la

"capital mercantil nacional", recuperó en los años treinta del siglo pasado, su dominio sobre un vasto espacio multirregional compuesto por lo que hoy en día son los estados de Morelos, Puebla, Hidalgo, y el Estado de México y una parte de Michoacán (Silva, 1993: 233-234).

La recuperación de esas redes fue tarea de viejos y nuevos comerciantes. Algunos habían sido miembros de los antiguos consulados, en tanto que otros tenían poco tiempo de residir en el país y procedían de diversos países europeos, o habían llegado al país en los últimos años del virreinato al abrigo de la expansión del régimen de libertad comercial decretado por la Corona española.

La estructura mercantil: primeros cambios

Al promulgarse la Independencia se aprecia en primer término la preservación de viejas casas de importación y exportación radicadas en la ciudad de México y el puerto de Veracruz, entre las que destacan las de Michaús y Aspirós, de Ana María Escalante y Antonio Terán, que se preservaron gracias a sus vínculos con el mercado exterior y al reforzamiento de la cohesión interna entre los antiguos miembros del Consulado de México, por medio de lazos familiares y de amistad.

En este último caso destacó un grupo de criollos de origen vasco, entre quienes sobresalían Lucas Alamán, Francisco y José María Fagoaga, [1] Pedro y Francisco Javier Echeverría y Mignoni, [2] y Manuel y Francisco de Iturbe. [3]

En segundo lugar, se observa en esos años la aparición de varias firmas anglosajonas dedicadas al comercio de la plata, la inversión minera y las exportaciones e importaciones, como fue el caso de las firmas de Richards Barclay y Cía., y de Robert Staples, además de las casas de comercio con las ciudades hanseáticas, tales como la de Bahre y Uthoff, Ebert y Schneider, Nolte y Wilson y Wilhelm Drusina y Cía, entre otras, algunas de las cuales establecieron vínculos mercantiles con las viejas casas novohispanas, especialmente en la minería, como es el caso de Fagoaga en Guanajuato.

Durante sus primeros años de residencia esos agentes establecieron su residencia en los puertos de Veracruz y Tampico, y poco después trasladaron su domicilio a la ciudad de México, dada la necesidad de vincularse con la élite política. Allí fundaron pequeños y medianos almacenes de importación y exportación, especializados en el comercio de productos suntuarios o de artículos de ferretería, así como de alimentos y textiles, remitiendo a cambio plata acuñada tan requerida en los mercados europeos y norteamericano. Antiguas y recientes firmas continuaron operando simultáneamente con mercaderías y con transacciones de crédito con sus clientes y proveedores, situados en ese espacio multirregional sobre el que la ciudad de México recuperó su dominio mercantil y financiero en el período independiente.

En tercer lugar, importa destacar el impacto de las leyes de expulsión de españoles en esos reacomodos y alianzas de la clase mercantil, lo cual, junto con la disolución de los consulados en 1829, se tradujo en la "revolución mercantil" vivida en años posteriores (Valadés, 1982:241-247). El historiador Harold Sims (1984:223 y 251) señala que una sexta parte de estos expulsados radicaba en el Distrito Federal (mil 33 sobre un total de 6 mil 610), lo que se tradujo en la pérdida de 12 millones de pesos para las arcas de ese distrito, según calculó el gobernador José María Tornel.

Pero la transformación no se limita al relevo de españoles por firmas europeas y norteamericanas, ya que estas son resultado del expansionismo económico manifiesto tras la disolución del equilibrio marcado por la Santa Alianza. Además, debe tomarse en

cuenta que la expulsión de los españoles se acompañó de múltiples expresiones xenófobas, lo que afectó por igual a los viejos y nuevos grupos de comerciantes, no sólo por el ambiente de incertidumbre y temor que provocó la invasión de Barradas a Tampico, sino por el hecho de que la salida de españoles afectaba también a socios y corresponsales, nexos que se forjaron en esa década recuperando los antiguos lazos entre comercio interno y externo, relación que llevó a grupos de ingleses a protestar ante las autoridades mexicanas (Sims 1984: 182184).

La vida política opacó el optimismo de comerciantes y propietarios que, alertados por la situación, reaccionaron como "hombres de bien", según se les calificó entonces. Ellos estaban preocupados "...únicamente de sus negocios, (por lo que) querían justicia y orden"; motivo por el cual apoyaron el ascenso al poder de Anastasio Bustamante en enero de 1830 (Arrangoiz, 1968:354).

Gobierno y préstamos: el inicio de la especialización bancaria

Pero ¿cómo se dio el paso de las casas mercantiles a las firmas bancarias, que implicaban una mayor especialización financiera a mediados del siglo XIX? De una parte, esto fue producto de la multiplicación de los intercambios y la consecuente difusión de los medios de pago (libranzas y letras de pago, primordialmente), en una respuesta a la escasez y concentración de dinero metálico.

Además de los factores propiamente mercantiles e institucionales, la formación y multiplicación de las casas bancarias obedeció, en buena medida, a los problemas de liquidez y demanda de crédito del erario público. De ahí la importancia de conocer el impacto de la expansión de la deuda pública interna en la multiplicación de las casas bancarias en la primera mitad del siglo XIX. [4]

Los contemporáneos reconocieron esta intensa y compleja relación que permitió consolidar a los acreedores como "el cuarto poder", término usado por el jalapeño Francisco de Paula de Arrangoiz para calificar a la agrupación de acreedores en la Junta de Crédito Público fundada en 1851, que más tarde Emilio Rabasa empleó para identificar el poder de la prensa porfiriana (Arrangoiz, 1968:412).

Es difícil recorrer todo el camino de este proceso formativo, por lo que sólo me referiré a la coyuntura de la década de 1830 a 40 reconocida como una fase de auge económico, en que tanto etapa formativa de las fortunas financieras y del empuje manufacturero y la puesta en marcha de políticas de fomento, entre las que destacó la colonización.

Entre los diversos factores que favorecieron el cambio de domicilio de esos agentes a la ciudad de México, destaca la posibilidad del gobierno federal de controlar una fuente de ingresos importantes como los del Distrito Federal, los cuales registraron una notable mejoría en esos años. [5] Sin embargo, es posible pensar que tal alza fuera sólo un espejismo que engañó a José María Luis Mora, quién calculó que aquellos ingresos ascendían a más de 2 millones de pesos anualmente, razón por la cual consideró que era un "... ramo digno de consideración..." (Mora, 1987:251).

Lo anterior se apoya en el hecho de que la segunda ley de expulsión de españoles fue seguida de una caída en los ingresos federales, como resultado de la salida de numerosos miembros del comercio y el clero regular pertenecientes a los grupos más poderosos económicamente hablando, y dada su capacidad para monopolizar la existencia de metálico y controlar los mecanismos comerciales y de crédito.

Entre 1828 y 1830 se registró una baja en diversos renglones de la recaudación: los fondos aduanales bajaron de 6 millones 684 mil pesos a 4 millones 986 mil, en tanto que en el ramo del tabaco los ingresos se redujeron de un millón 13 mil pesos a 841 mil, siendo menor la caída en el ramo de contribuciones, que sólo disminuyó de un millón 435 mil a millón 398 mil.

El comienzo de la crisis del crédito público

Al tiempo que disminuían los recursos, el gobierno de Bustamante recurrió a los préstamos en su primer año de gobierno por 2 millones 379 mil pesos, ofreciendo como garantía la hipoteca de parte de las rentas federales, medida que a su vez repercutió en una baja en los ingresos e incrementó el déficit público a 2 millones 172 mil pesos (Tenenbaum, 1986:211 y 215).

Rafael Mangino, entonces secretario de Hacienda propuso diversas reformas con el objeto de diferenciar ingresos y préstamos y a fin de asegurar la recaudación de los primeros y reducir el recurso a los segundos, pero fracasó ante la facilidad que tuvo Bustamante para obtener recursos entre los medios eclesiásticos y mercantiles, que fueron suscriptores voluntarios de esos tres préstamos solicitados en el año de 1830.

En enero de ese año se suscribió el primer préstamo con respaldo en los ingresos de la aduana del Distrito Federal, operación en la que participaron herederos de la aristocracia criolla como Mariana Gómez de la Cortina, Santiago Aldasoro y los hermanos José y Mariano Tagle, además de los conventos de Santo Domingo, San Camilo, San Felipe Neri, San Agustín y la Merced, y prósperos comerciantes como Antonio Terán, Gómez Collado, José Célis y Miguel Angel Michaús.

Dos meses más tarde, la ley del 4 de marzo de 1830 emitió nuevos certificados respaldados por las aduanas marítimas, que autorizaban a sus compradores la aplicación de un descuento entre el 10 y el 15 por ciento, pagaderos a 90 días a la vista en las aduanas marítimas, en dinero en efectivo o en descuento sobre los derechos directos o indirectos causados o por causar. El descuento aplicado a los títulos gubernamentales aún era bajo, sobre todo si se tienen en cuenta las tasas de años posteriores, las cuales rebasarían el cien por ciento a medida que se agudizaba la quiebra del erario federal.

La operación de marzo de 1830 fue negociada por el conocido financiero de origen vasco Felipe Neri del Barrio, en representación personal y de antiguos comerciantes veracruzanos de origen también vasco como la casa de Agüero González y Cía., además de representar a la firma inglesa de Manning y Marshall y al conocido especulador Antonio de Garay, cercano al general Santa Anna. Asimismo, figuraban los alemanes Gustavo Schattler, socio de la casa Schneider y Cía. y la de Carlos A. Uhde, radicada en el puerto de Mazatlán y en Matamoros (Espinosa, 1883: 149-156).

El 4 de septiembre de ese año, el Congreso autorizó al gobierno de Bustamante emitir un tercer préstamo, respaldado con los ingresos de las aduanas, por 2 millones de pesos y un descuento del 5 por ciento al mes (Espinosa, 1883:199-200). Animado por los recursos obtenidos, el gobierno de Bustamante destinó esos fondos al pago de los bonos de la deuda inglesa, y para cubrir parte de los adeudos a los cosecheros del tabaco. Además se anunció la formación del Banco de Avío para fomentar la industria textil con un millón de pesos proporcionados por el gobierno para su fondo inicial, con la promesa de remitirle hasta seis mil pesos anuales producto de los derechos aduanales a los textiles importados. [6]

Los compromisos adquiridos por el gobierno de Bustamante se multiplicaron al mismo tiempo que se redujeron los ingresos federales, lo que generó un alto déficit en el erario por 8 millones de pesos en 1831 y ocasionó problemas de liquidez al gobierno y le obligó a suspender los pagos al siguiente año (Prieto, 1990:638). Estos fenómenos, que originalmente fueron producto de la coyuntura mercantil y política, se tradujeron en prácticas recurrentes a lo largo del quinquenio, surgidas de la necesidad de satisfacer los reclamos de pago de un creciente número de empleados. Asimismo, estos fondos se destinaron a la manutención de los ejércitos que atendían rebeliones locales o levantamientos militares, además del conflicto con Texas. De esta forma, entre 1830 y 1836 el monto de los préstamos subió de un promedio anual de 2 millones a cerca de 9 millones y medio de pesos, lo que acarreó un aumento del déficit público que pasó de los 3 millones de pesos a más de 11 millones de pesos en ese mismo período (Urias, 1985:90-91).

Ello se tradujo en presiones del grupo de comerciantes banqueros radicados en la ciudad de México y en el puerto de Veracruz, que eran cercanos al general Santa Anna y reclamaban pagos tras la suspensión ordenada en 1832. Entre los demandantes se encontraban Francisco Gómez, Antonio Garay, Manuel Gargollo -futuro socio de Manuel Escandón-, Francisco Agüero y Juan Nepomuceno de Arce, quienes exigieron al gobierno de Bustamante cubrir los adeudos por medio de ordenes a la Tesorería General o a la casa de Moneda de la ciudad de México (O. de Montellano, s.f.:233 y 55). Ante las negativas y dificultades del gobierno, buscaron nuevamente un apoyo en el general Santa Anna, especialmente entre los comerciantes de los puertos de Veracruz y Tampico y de la ciudad de Jalapa; por ese entonces Santa Anna sería triunfador en las elecciones, tras un breve período de tres meses del general Gómez Pedraza.

Asediado por las presiones financieras y el conflicto texano, el general Santa Anna dejó el gobierno en manos del vicepresidente Gómez Farías, quien en un intento por restablecer el orden financiero recuperó los principios regalistas para fundamentar diversas reformas, entre las que estaban la secularización de los bienes de las misiones de California y la incautación de los fondos de Filipinas, además de la supresión de la obligatoriedad del diezmo. Estas disposiciones llevaron a la caída del gobierno liberal en mayo de 1833 y a la vuelta del general Santa Anna, tras la generalización del movimiento en amplias zonas del país.

El general José María Tornel dictó un bando el 12 de diciembre de 1833 por el que ordenaba unificar y clasificar créditos no cubiertos del período de Bustamante, que serían pagados en las aduanas de México, Veracruz y Tampico, decisión que hipotecó los ingresos federales (O. de Montellano, s.f.:257-269). La medida quitó al erario su fuente de ingresos más importante, por lo que hubo que recurrir a la emisión de títulos gubernamentales. [7] Se procedió a la emisión de moneda fiduciaria en cobre en la casa de moneda de la ciudad de México, y se acuñaron poco más de 4 millones 850 mil pesos entre mayo de 1829 y el año de 1842, con una acuñación total que rebasó los cinco millones de pesos. [8]

Estos instrumentos inundaron el mercado monetario y crediticio de aquellos años alterando la antigua estructura del circulante, al sumarse a éste los bonos y documentos gubernamentales vencidos o devaluados, lo que causó la quiebra de algunas casas y personas que estaban involucradas en los negocios públicos, a la vez que se produjo el encarecimiento del crédito al acentuarse el problema de escasez de metálico y la depreciación de los instrumentos de pago.

Así, por ejemplo, se pusieron a la venta los depósitos de los adeudos del extinguido Consulado de México y, según los registros notariales de 1836-1839, fueron numerosos

los préstamos a las fábricas y a las minas que se respaldaban en la hipoteca, cuyo interés varió del 5 o 6 por ciento al 12 por ciento al año, alcanzando en algunos casos una tasa del 2.5 al 3 por ciento mensual (Vázquez, 1487:409-410 y 354-366).

Nuevas y viejas firmas

Los fenómenos anteriores se tradujeron en el reforzamiento de los detentadores del crédito entre los diversos agentes económicos, ocupando un lugar creciente el gobierno nacional. Y posiblemente, esto facilitara la transformación de las casas y firmas, al concentrarse los depósitos sólo en unas cuantas y poderosas compañías especializadas en operaciones de banco, y surgir una generación de prestamistas de nuevo tipo, genéricamente conocida como los agiotistas.

Estos individuos fincaron su poder económico en los lazos personales de tipo familiar o mercantil. Algunos se introdujeron en el mundo de los negocios gracias a los recursos y bienes recibidos por la vía de los lazos consanguíneos, como fueron la herencia, la asociación con hermanos o primos y las dotes, operaciones que muestran un alto registro en los protocolos notariales de esos años.

Un segundo aspecto de la introducción y ascenso de estos individuos o firmas, fue la creciente especialización en la esfera de los negocios de banco, por medio de los depósitos y los préstamos. Este fenómeno ha sido estudiado por diversos historiadores. Igual importancia tuvo el recurso de la representación por parte de un poderoso grupo de abogados en crecimiento, o por antiguos miembros de la aristocracia financiera. Esta mecánica permitió que destacaran sólo unas cuantas personalidades que tendemos a confundir como los hombres más ricos del período, cuando su fuerza se mide por su capacidad para administrar bienes y capitales de un mayor número de ahorradores, entre ellos la Iglesia; mecánica que por otra parte anuncia la formación de un nuevo tipo de hombres de negocios, la cual se preservó sin grandes cambios hasta finales del siglo.

Entre los casos estudiados, y por ende más conocidos, encontramos la firma procedente de Guanajuato de Juan Antonio Béistegui, que abrió su filial en ciudades mexicanas a fines de los años de 1830, pero su traslado definitivo a la capital ocurrió diez años más tarde. Esta última casa se dedicó a las labores de comisionista y cobro de libranzas y letras, con lo que reunió un capital inicial de 16 mil pesos (Meyer, 1986:110-115). Entre 1828 y 1837 operó la firma del panameño Martínez del Río y del alemán Guillermo Drusina, que a la vez que como empresa textil, sobresalió como casa bancaria dedicada a la consignación, las comisiones y las fianzas, y que reunió un capital inicial por 90 mil pesos. Más tarde se separaron Martínez del Río y Drusina, y en 1838 se inauguró la casa de Martínez del Río hermanos, cuyos socios fueron Antonio Garay, Manuel Escandón, Thomas Murphy y la casa inglesa de Manning y Marshall, firma que se dedicó a los negocios bancarios y a la compra venta de letras de cambio y libranzas, reuniendo un capital inicial de 490 mil pesos (Beato, 1986:63 y Walker, 1991:130-182). En 1833 se fundó la firma de Manuel Escandón, que hasta entonces había sido apoderado de la casa de Agüero F. González y Cía., (Urias, 1986:33-36). Y por último Gregorio Mier y Terán heredó en 1835 una fortuna con la que fundó una casa de préstamos (Oyarzábal, 1987: 140 157).

Margarita Urias ubica el período formativo de esa dinastía durante los años de 1833 a 1856 al estudiar el ejemplo de Manuel Escandón proceso que dio inicio con el matrimonio de su hermano (José Joaquín) con la nieta del Marqués del Apartado (Lina Fagoaga). Parte de la dote fue invertida en la empresa de Escandón, con la cual se inició la compañía de diligencias (Urias,1986:35). Este connotado empresario, junto con Antonio de Garay, apoderado del general Santa Anna y en ese momento Ministro de Hacienda

(Urias, 1986:58), y con la casa de Viya Hermanos, que tenía representación consular en Cádiz y Sevilla, vincularon la plaza mercantil del puerto de Veracruz con la plaza de la ciudad de México; para ello contaron con el apoyo del general Santa Anna, que se tradujo en que manejaran la única línea de diligencias existente en el país.

Asimismo, se aprecia en el México independiente la preservación de un selecto y reducido grupo de vasco mexicanos radicados en la ciudad de México, herederos de la fuerza de los vizcaínos del Consulado de México. Entre ellos se hallaban los hermanos Francisco Javier y Pedro Echeverría y Mignoni, herederos de una gran fortuna formada durante el período del comercio neutral entre 1798 y 1808. El primero de ellos era el mayor, y fue el dueño de la hacienda de La Gavia, una de las más poderosas haciendas localizadas en lo que hoy es el Estado de México, productora de diversos artículos agrícolas y ganaderos para el mercado de la ciudad de México. Desde 1834 Francisco Javier Echeverría dejó su tierra natal para establecerse en la ciudad de México y compartió con otros miembros de la élite capitalina sus responsabilidades en obras de beneficencia y culturales, desempeñándose como presidente de la Academia de San Carlos fundada por los vizcaínos en el siglo XVIII. Asimismo, Echeverría destinó recursos y esfuerzos para fundar el primer centro correccional para jóvenes delincuentes en la ciudad de México. En su época fue reconocido como "persona acomodada, hombre organizado en sus negocios y lector de los economistas franceses." Esa riqueza y conocimientos le permitieron en 1839, cuando se presentaron los primeros síntomas de una prolongada bancarrota hacendaria, que el presidente Bustamante lo nombrara Ministro de Hacienda. Se dice que con el fin de reordenar el ramo prestó recursos propios, decisión que hizo posible que asumiera un importante papel en los negocios públicos en los años posteriores, como lo demuestra su permanencia en la vida política, desempeñándose como responsable provisional del Poder Ejecutivo, cargo que entregó al general Santa Anna en octubre de 1841. Falleció en 1852 (Valadés, 1982:351).

La riqueza y relaciones políticas de la familia Echeverría fueron muy amplias, entre ellas destacan aquéllas familiares establecidas con la firma mercantil de Agüero. Destacó allí su sobrina Francisca de Agüero y González de Prim nacida en el puerto de Veracruz en 1830. Francisca era hija del comerciante de origen vasco Francisco de Agüero y de Antonia González y Echeverría, y vivió su infancia y adolescencia en Francia, donde se casó con el general Juan Prim en 1856. Su hermano, Pedro Echeverría y Mignoni, destacó como promotor de la industria nacional al formar parte, durante varios años, de la Comisión de Industria fundada en 1831. Con una visión más social que financiera, Pedro promovió desde su alta posición política la supresión de los impuestos extraordinarios, tan solicitada por los gobiernos de la época, amén de plantear la necesidad de que ellos no afectaran a sirvientes y jornaleros. En 1853, ante las tentativas de los liberales moderados por llevar a cabo una reforma administrativa en diversos ramos, Pedro Echeverría se encargó de reordenar las aduanas marítimas y fronterizas y consolidar el pago de la deuda nacional a partir de la Junta de Crédito Pública, de la cual formó parte. En 1859, cuando la guerra civil de Reforma, murió en su hacienda de Ajuchitan, en Querétaro.

Por último, recordemos la experiencia de Francisco de Iturbe y Anciola, hijo del gobernador de Nuevo Santander (hoy estado de Tamaulipas), reconocido comerciante en el momento del rompimiento del monopolio comercial entre la ciudad de México y Sevilla, que se enriqueció durante la etapa del comercio neutral y heredó a sus hijos un gran emporio comercial en la zona del golfo. Sus herederos se trasladaron a la ciudad de México y su hijo mayor, Francisco, sobresalió por su importancia en el agio y en la adquisición de bienes eclesiásticos durante el fallido intento de desamortización de 1846, que quiso sufragar los gastos de la guerra con los Estados Unidos. No obstante, el presidente Paredes le invitó a ser Ministro de Hacienda, pero se ganó la animadversión de otros agiotistas por ordenar la suspensión del pago de los vales del tesoro, por lo que

salió del gabinete, aunque regresó dos períodos más tarde para formar parte de una Junta de Hacienda. Entonces no tuvo éxito en sus gestiones para conseguir fondos para cubrir las necesidades del gasto público, por lo que renunció.

Un tercer grupo de financieros del México independiente fue extranjero. Entre ellos destacaron los hermanos Jecker, judíos de origen y suizos de nacionalidad, quienes llegaron a México en 1830. Uno se desempeñó como médico y el otro, Jean, se hizo banquero (Krause, 1987:43). En sus inicios Jean fue socio de una de las firmas mexicanas más conocidas del período, Jecker, de la Torre y Cía., fundada en 1844 y dedicada, como otras empresas de esos años, tanto al comercio de importación y exportación como a los préstamos privados y los negocios con los documentos de la deuda pública. [9] Esa firma se introdujo en los negocios mineros aprovechando el retiro de Ewen MacKintosh en el ramo, al terminar la guerra entre México y los Estados Unidos; así Jecker logró tomar bajo arrendamiento cuatro de las cinco casas de moneda de aquella firma (Guanajuato, Zacatecas, Guadalupe Calvo y Culiacán), y que cedió en 1853 a la Sociedad Anglo-Mexicana. Más tarde, Jecker participó en las aventuras de filibusteros franceses en los estados de Sonora y Baja California y en territorio norteamericano (Arizona), como consecuencia de la atención que grupos franceses habían mostrado antes en la riqueza minera de esos estados, y buscar influir con ello en la reordenación económica de la región, tras la pérdida de los territorios mexicanos de la Alta California (Kay W., 1989:85-109 y Suárez, 1992:57-62). En esta zona se localizaban las minas de Nueva Almadén, las cuales quebraron el monopolio mundial del azogue que hasta entonces habían detentado los Rotschild.

Dichas minas eran administradas por la firma mercantil anglo-norteamericana de Barrón y Forbes, localizada en San Blas, con la que se asoció Jecker en esos años. También se vinculó con las casa de otro conocido financiero de esos años, Manuel Escandón, el cual se proponía promover directamente el tráfico de plata directamente con China, tráfico que hasta entonces había estado dominado por los centros europeos (Randall, 1977:187-191 y Herrera, 1990:35-41).

Apoyado por estos personajes el general Santa Anna retornó al poder en 1841, tras la rebelión en Perote, golpe que se ha reconocido como el ascenso "de la nueva fracción de comerciantes, empresarios y propietarios [...] vinculados al caudillo santanista por lazos de amistad, fomentado por la convivencia cotidiana y los intereses afines". [10] No en balde uno de los miembros de la poderosa firma de Martínez del Río escribió en esos años de guerras e incertidumbres a uno de sus corresponsales, refiriendo la seguridad y confianza que había en México para hacer negocios, misma que calificó como equivalente a la de cualquier otra parte del mundo (Walker, 1991: 152).

Este ambiente fue el contexto del restablecimiento del centralismo y la revisión de disposiciones mercantiles buscaba de esta forma establecer un nuevo marco jurídico, espejo de esos intereses y coaliciones. Esta tarea fue encomendada al diputado Francisco María Lombardo, quien debía formar una comisión que redactara una nueva ley. No hay noticias de los resultados de esos trabajos, pero la búsqueda de equilibrio entre los mercados financieros regionales obligó al general Santa Anna a dejar a los particulares la definición de la actividad comercial, estableciéndose para ello, desde 1841, los Tribunales de Comercio como órganos autónomos en términos jurisdiccionales, lo que atendía a la formación de colegios y lonjas de comercio fundadas después de la extinción de los Consulados en 1829, que dejaron desprovista a esta actividad de reglas y cuerpos.

Jerarquía y especialización bancaria

El aumento del endeudamiento a partir del gobierno de Bustamante reforzó al grupo de agiotistas. Por ello es necesario revisar su papel en la jerarquización y especialización de las operaciones crediticias, rasgos que habrían de ser recogidos y publicados en 1839 por el jurisconsulto Rodríguez de San Miguel. Retomando antiguas disposiciones como las Ordenanzas de Bilbao, además de diversos decretos y bandos, Rodríguez formó un reconocido cuerpo jurídico que se titula Pandectas hispanomexicanas. En materia mercantil esta compilación, publicada en 1839, se integró con tres títulos denominados "De los Cambios y Bancos Públicos", "De los Mercaderes y comerciantes y sus contratas" y "De los corredores de plazas de comercio". [11]

En estos textos las actividades bancarias se preservaron como parte del comercio, según la tradición de origen colonial prevista en las Ordenanzas de Bilbao, donde no había distinción entre mercader, tratante y comerciante, rasgo que fue permanente hasta bien avanzado el siglo XIX, en tanto que el comercio fue un campo reducido y poco desarrollado en las diversas economías regionales en proceso de mercantilización (Rodríguez, s.f.:358).

La circulación de los diversos títulos de crédito e instrumentos de pago fue un campo de la actividad mercantil que contó con ordenamientos precisos desde el período colonial, pero su crecimiento aumentó en el siglo XIX, en la medida que la creciente mercantilización se sustentó en los títulos de crédito, tales como las libranzas, las letras de cambio, los pagarés, los vales y otros documentos públicos y privados que progresivamente sustituyeron al metálico, destinado preferentemente a la exportación para equilibrar la balanza comercial o bien concentrado en un reducido núcleo monopolizador de la liquidez del país, como fueron las grandes casas mercantiles.

Corredores y comisionistas

Entre las diversas disposiciones de las Ordenanzas de Bilbao recuperadas en las Pandectas están las referentes a los comisionistas y corredores, auxiliares del comercio. Los primeros realizaban su oficio por encargo del productor o del socio, en tanto que los corredores operaban por cuenta propia, pero siempre desempeñando sus funciones paralelamente al comerciante o financiero.

El término corredor es sinónimo de intermediario y deriva de corretaje, palabra que proviene del término francés (occitano) corratatge (1548) (Corominas, 1983:174). En la práctica mercantil, desde el período colonial, se reconocieron diversos campos de actividad para estos individuos, como eran los de cambio y comercio; otros eran los de lonja y los de peso. [12]

Estos agentes operaban en las lonjas de comercio al lado de los prestamistas y negociantes, fungiendo como responsables de los cambios entre cobradores y acreedores de diversas plazas. También en las Ordenanzas de Bilbao se señalaba que estos auxiliares debían registrarse ante la autoridad, además de quedar obligados a llevar un registro de sus operaciones con mercaderes y traficantes de dinero; este ramo quedó vedado para los extranjeros, ya que no podían realizar sus operaciones contratando "en las Indias oro en polvo" (Rodríguez, s.f.:358).

En 1809, ante la creciente oleada de préstamos de fines del período colonial, el Consulado de México solicitó al virrey Revillagigedo publicar nuevamente el bando de corredores que se había emitido en 1794 (Rodríguez, s.f.:369-370). Desde entonces fueron reconocidos como intermediarios mercantiles, responsables de relacionar la oferta y la demanda del metálico y de los títulos de pago, bien fuera distribuyendo mercancías de diversa naturaleza o negociando con los documentos de pago o de crédito que emitían

las casas comerciales con el fin de redoblar el volumen de operaciones ("el crédito es un complemento de la moneda"). Razón por la cual esos agentes de comercio eran considerados como:

una especie de terceras personas entre comprador y vendedor que intervenían en los contratos [...] Como mediadores facilitaban los contratos mercantiles al informarse de quiénes querían comprar o vender, y a la vez vigilaban que estos contratos se hicieran de acuerdo con las leyes, sin que se cometieran abusos por ninguna de las partes (Pérez Herrero, 1988:217).

Tras la ausencia de reglas mercantiles al desaparecer los Consulados en el año de 1828, y ante el incremento de las transacciones de documentos, el gobernador del Distrito Federal, José María Tornel, dictó un bando para corredores en 1834, con el fin de evitar que ese ramo fuera campo de "... hombres ignorantes, algunos sin los requisitos legales, y multitud de extranjeros que usurpan ese derecho a los mexicanos arrebatándoles una manera de subsistir" (Rodríguez, s.f.:370-371).

Más tarde, en 1838, este Colegio acordó una tarifa diferenciada a los corredores con base en su jerarquía, lo que daba cuenta de las dificultades de liquidez que padecía la ciudad de México en ese año de creciente especulación de metales, afectada además por la demanda norteamericana y por la creación el Banco Nacional de amortización de la moneda de cobre un año antes.

Las cuotas que debían pagar los corredores al fisco eran variadas. Por ejemplo, el agente debía pagar un dos por ciento por tramitación de depósitos irregulares por diez mil pesos o más y sólo un uno por ciento para menores cantidades; en cambio, la compra venta de metales en un año de creciente especulación, así como los cambios de letra en los mercados internos o externos, le obligaban a pagar un octavo en toda permuta entre monedas de plata, oro y cobre, en tanto que el tráfico de documentos del Tesoro tenía una cuota de un cuatro por ciento sobre el valor pagado por éste, y un medio por ciento en todos aquellos cobros de libranzas y ordenes de pago que fueran redimidos por el gobierno (Rodríguez, s.f.:373-377).

Más tarde se fundó un Colegio de corredores en la plaza de México, autorizado a dar fianzas. Este ordenó nuevas tarifas en marzo de 1842. Su presidente fue el conocido prestamista y traficante de metálico Guillermo Drusina, y el vicepresidente fue el abogado Juan N. Vértiz miembro de la dinastía de los bancos de plata que funcionaron en el siglo XVIII para agilizar este comercio.

Según la Marquesa Calderón estos agentes no tenían oficina fija y deambulaban todos los días ante los ministerios en Palacio Nacional, especialmente esperando el arribo del carruaje presidencial. De allí que la zona circundante a Palacio Nacional se convirtiera en el "corazón de las finanzas". En este vecindario, comerciantes y empleados públicos intercambiaban, dado el carácter del lugar como centro de compra -con descuento-, los vales de alcance con los que el gobierno pagaba a sus empleados. También era oficina de pago de obligaciones fiscales con esos y otros documentos y en ocasiones afortunadas, plaza de redención de títulos por medio de la socorrida práctica de la almoneda.

Pero la dependencia del crédito no sólo era un recurso público. La sociedad dependía por entero de él, bien fuera para agilizar sus operaciones o por el mero préstamo, operaciones en las que concurren por igual hacendados, mineros, manufactureros, y comerciantes, además de los gobiernos que pasaron a ser los mayores consumidores de crédito, de donde resulta la dualidad entre acreedores y deudores en un mercado cada vez más especializado y jerárquico.

A esta etapa definitoria de la estructura financiera de la ciudad de México le siguen los años de la crisis del crédito público. La década de los cuarenta y cincuenta constituyen la etapa de las presiones al Tesoro, de la imposibilidad de llevar a cabo una reforma hacendaria, del ascenso e inmediata caída de los ministros de Hacienda, pero también es la fecha de la protección diplomática para acreedores que fueron promotores de convenciones y acuerdos especiales; decenio de fragilidad donde se conjugaron las guerras y rebeliones y el fortalecimiento de los llamados "vampiros del erario"; pero también fue el momento de la apertura a la inversión como punto de partida de los proyectos de fomento y duplicación de las propuestas bancarias.

CITAS:

[*] Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

[1] Herederos del Marqués del Apartado, uno de los más ricos mineros del período borbónico. Véase Brading, 1972:235-238 y 240-243. El hermano mayor de la familia Escandón estaba casado con la nieta Fagoaga.

[2] El último era hijo de José María de Echeverría; nació en Guipúzcoa en 1764 y murió en la ciudad de México en 1837; elegido alcalde honorario de la Audiencia y diputado de las Cortes españolas, estuvo casado con su prima, hija del Marqués del Apartado (véase Ladd, 1986:280-281). Fue favorable a la causa independiente. Después del retiro de Iturrigaray, ocupó el cargo de regidor de la ciudad de México en 1812, además del de síndico. El virrey Calleja le acusó de infidencia en 1813 y fue desterrado a España hasta 1821. Pasó a formar parte de la Junta Provisional Gubernativa. Firmó el Acta de independencia y participó también en la fundación del rito escocés, siendo diputado en 1822. Fue puesto en prisión al ser acusado de conspirar contra el emperador Iturbide. Más tarde, por su origen peninsular fue expulsado en 1827 siendo autorizado a regresar a mediados de la década de 1830.

[3] Hijos de Francisco de Iturbe uno de los más ricos traficantes de plata con Manila, y gobernador de Nueva Santander. Véase Kicza, 1986:279-280.

[4] El desenvolvimiento de la deuda interna ha permitido identificar esta etapa como "la era de los agiotistas", título del trabajo de Barbara Tenenbaum (1986).

[5] Según Harold Sims, los impuestos recibidos fueron de 666 mil 667 pesos en el Distrito Federal y los territorios, y de 17 mil 248 en Nuevo León (1984:97).

[6] El gobierno de Bustamante apoyó la iniciativa pero en los años siguientes se diluyó, y los recursos del Banco provinieron de particulares, en tanto que sus recursos favorecieron a empresarios radicados en las municipalidades del Distrito Federal y en ciudades de la región central del país, entre quienes destacó Esteban de Antuñano. Querétaro, Morelia y Puebla quedaban dentro de la radio de influencia mercantil de la capital mexicana. Ver Potash, 1959:69-76 y 98-112.

[7] Por ejemplo, el 9 de marzo de 1835 se dictó una ley relativa a todos los créditos no amortizados, convenidos desde 1832 hasta el 18 de noviembre de 1834, que se cambiaron por los llamados vales de amortización de créditos. Espinosa, 1883:223-231.

[8] En esos años también fueron acuñadas piezas de cobre en la casa de moneda de Chihuahua (50 mil pesos entre 1833 y 1835), de Guadalajara (entre 1831 y 1836 un total

de 61 mil pesos), de San Luis Potosí (23 mil pesos entre 1827 y 1835) y de Zacatecas (107 mil entre 1824 y 1829). Cfr. Manuel Orozco y Berra, 1854:952-957.

[9] La compañía se fundó en 1844 bajo la razón social de Tomás de la Torre, Jecker y Cía, pasando en 1856 a Jecker-Torre y Cía, y a convertirse en 1856 en Jecker, Torre y Cía. Ver María Teresa Huerta, 1986:164-174.

[10] En este movimiento se conjugaron diversos conflictos entre el centro y la federación, y allí se encuentra el del general Mariano Arista, radicado en la frontera de Tamaulipas y protector de la entrada del algodón prohibido (Arrangoiz, 1968:376-379). Guillermo Prieto sostiene que en esa revuelta de 1841, "la misma casa agiotista (envió) dinero a los que estaban atacando al gobierno en los suburbios de la capital (...) y que la guarnición del gobierno se pagó de aquella misma casa" (1990:647).

[11] En el Discurso preliminar de la obra, Rodríguez de San Miguel precisa que reunió numerosas disposiciones dictadas en "...diversos siglos y códigos mezclados con las constituciones españolas, con las recopiladas y las no recopiladas de Indias, con las de la forma federal y con las de la central, las unas en parte vigentes, en parte alteradas, en parte acomodadas: con nomenclaturas de autoridades, corporaciones y causas que han desaparecido".

[12] El primero operaba con letras de pago emitidas por dinero prestado, en tanto que el de comercio intervenía en las negociaciones de letras o de otros valores emitidos para realizar operaciones de compra-venta; por su parte, el corredor de peso era el que intervenía en la venta de comestibles, y el de mercaderías asistía a los comerciantes para buscar comprador de sus productos, a este último también se le conocía como corredor de oreja. Ver M. Maurice Block, Dictionnaire général de la politique, Paris, O.Lorenz, Librairie-Editeur, 1873, vol 1., p. 273 y M. Léon Say, Nouveau dictionnaire d'Economie politique, Paris, Guillaumin et Cie Editeurs, 1893, vol I, p.222-223.

BIBLIOGRAFIA:

Arrangoiz, F. (1968), México desde 1808 hasta 1867. Editorial Porrúa, México.

Beato, Guillermo (1986), "La casa de Martínez del Río: del comercio colonial a la industria fabril", en Cardoso, Ciro (comp.), Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI Editores, México.

Brading, David (1972), Mineros y comerciantes en el México borbónico. Fondo de Cultura Económica, México.

Corominas, J. (1983), Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Editorial Gredos, Madrid.

Espinosa, Fernando (1883), Colección de leyes y disposiciones relativas al crédito público desde el año de 1821, primero de la Independencia que se forma y publica en cumplimiento de orden de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. Tomo I, Imprenta Agrícola-Comercial, México.

Herrera, Inés (1990), "Mercurio para refinar la plata mexicana en el siglo XIX", en Historia Mexicana, México.

Huerta, María Teresa (1986), "Isidoro de la Torre: el caso de un empresario azucarero. 1844-1881", en Cardoso, C. (comp.), Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI Editores, México.

Kay W., Rufus (1989), "Los franceses en Sonora", en Cuevas Arámburu, M. (comp.), Sonora. Textos de su historia. Vol. II, Gobierno del Estado e Instituto Mora, México.

Kicza, John (1986), Empresarios coloniales. Familias y negocios en el México borbónico. Fondo de Cultura Económica, México.

Krause, Corinne A. (1987), Los judíos en México. Universidad Iberoamericana, México.

Ladd, J. (1986), La nobleza mexicana en la época de la Independencia. 1780-1826. Fondo de Cultura Económica, México.

Meyer, Rosa María (1986), "Los Béistegui, especuladores y mineros. 1830-1869", en Cardoso, C. (comp), Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI Editores, México.

Mora, José María Luis (1987), Obras completas. Vol. 4, Instituto Mora y Secretaría de Educación Pública, México.

Orozco y Berra, Manuel (1854), "La moneda en México", en Diccionario universal de historia y de geografía. Tomo V, Imprenta de F. Escalante y Cía., México.

Ortiz de Montellano, Mariano (s.f.), Colección de leyes, decretos y circulares sobre el arreglo del crédito nacional, desde el mes de octubre de 1821 hasta diciembre de 1841. Manuscrito, México.

Oyarzábal, Shanti (1986), "Gregorio Mier y Terán en el país de los especuladores. 1830-1869", en Cardoso, C. (coord.), Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI Editores, México.

Pérez Herrero, Pedro (1988), Plata y libranzas. La articulación comercial en el México borbónico. El Colegio de México, México.

Potash, Robert A. (1959), El banco de avío en México. El fomento de la industria. 1821-1846. Fondo de Cultura Económica, México.

Prieto, Guillermo (1990), Lecciones elementales de economía política. Banco Mexicano Somex y Miguel Angel Porrúa, México.

Randall, R. W. (1977), Real del Monte: una empresa minera británica en México. Fondo de Cultura Económica, México.

Rodríguez de San Miguel (s.f.), Pandectas hispanomexicanas. UNAM, México.

Silva, Jorge (1993), "El mercado urbano de la ciudad de México. Abasto e introducción", en Ludlow, L. y Silva, J., Los negocios y las ganancias, Instituto Mora e Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México.

Sims, Harold (1984), La expulsión de los españoles de México. 1821-1828. Fondo de Cultura Económica, México.

Suárez, Ana Rosa (1992), Un duque norteamericano para Sonora. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

Tenenbaum, B. (1986), México en la época de los agiotistas. 1821-1857. Fondo de Cultura Económica, México.

Urias, Margarita (1985), "Militares y comerciantes en México. 1830-1846", en Florescano, E. (coord.), Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina. Editorial Nueva Imagen, México.

Urias, Margarita (1986), "Manuel Escandón: de las diligencias al ferrocarril. 1833-1862", en Cardoso, C. (coord.), Formación y desarrollo de la burguesía en México. Siglo XXI Editores, México.

Valadés, José (1982), Orígenes de la República Mexicana. La aurora constitucional. Editores Mexicanos Unidos, México.

Vázquez, J. et al. (1987), Guía de protocolos. Archivo general de notarías de la ciudad de México, año de 1836. El Colegio de México, México.

Walker, David W. (1991), Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México. Alianza Editorial, México.